"2023 -40º Aniversario de la Restauración de la Democracia" .

Nº xxx / En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, al primer día del mes de febrero del año dos mil veintitrés, reunidas las Sras. Juezas de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Única Instancia, Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas, para dictar sentencia en la presente causa caratulada: **"U.F.C.C. S/ ACCIÓN DE AMPARO"**, Expte. Nº xxx/21, de la que;

RESULTA:

Afs. xxx se presenta la Sra. C.C.U.F., con patrocinio letrado, y promueve Acción de Amparo contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, solicitando: 1) la declaración de ilegalidad, nulidad absoluta, inconstitucionalidad e convencionalidad de la Disposición Nº 304/21 en cuanto dispone el cese de la subrogancia que venía desempeñando en el cargo de categoría Nivel Director -Fiscal -porcentaje 71,00 -Área S.P.P. Sala I (Fiscalía Nº xx); 2) la declaración de inaplicabilidad, inconstitucionalidad e inconventionalidad del punto IV, inc. a), de la Resolución Nº 97/84 -Reglamento Interno de Subrogancias-.

Relata que es Contadora Pública Nacional y presta funciones desde el 17/03/14 en el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, ingresando por concurso público externo de antecedentes y oposición en la categoría auxiliar administrativa. Que luego de participar en concursos internos ascendió primero a técnica -4 -administrativa, revisora de primera - control y juicio de cuentas, para luego ascender a Jefa de Departamento -Supervisor.

Señala que en el mes de junio del año 2019 se le otorgó mediante Disposición Nº 221/19 la subrogancia del cargo de categoría Nivel Directora -Fiscal -porcentaje 71,00 - Área S.P.P. Sala I -(Fiscalía Nº xxx), fruto de la dedicación, esmero, esfuerzo y contracción al trabajo con la que se desempeñaba.

Destaca que su carrera administrativa dentro del Tribunal de Cuentas es más que prometedora y que no tuvo ningún tipo de sanción disciplinaria o problema interno con sus compañeros y personal subordinado, manteniendo en todo momento una conducta intachable y sumamente decorosa, desempeñándose desde su ingreso en la Sala I bajo la dependencia de la Secretaría Relatora "B" S.P.P. a cargo del Cr. L.M.D.C.

Expone que el 13/08/21, en las instalaciones de la Fiscalía Relatora "A" durante la entrega de notas del examen de Fiscal del Área Central, en la que se encontraban presentes la Cra. S.j (Fiscal Relatora A), el Cr. L.M.D.C. (Fiscal Relator B), y el Dr. S.R (Veedor por el Gremio APOCCH), el Cr. L.M.D.C., en oportunidad de efectuar la devolución de su examen, profirió en un tono escandalizador, exagerado, con alto contenido emocional y gestual, las expresiones "que se asustó con mi examen", "que no pudo dormir en toda la noche", "que fue una vergüenza", "tu examen me dio miedo", "vení a la tarde y te doy cátedra", repitiéndolo en varias oportunidades, todo ello finalizando con que "no me encuentro capacitada para ejercer el cargo de Fiscal" y un tanto amenazante "que debería rever dicha subrogancia".

Indica que ante esos hechos realizó una presentación el 17/08/21 ante el Tribunal de Cuentas, poniendo en conocimiento la situación de maltrato laboral y verbal sufrida por parte de su superior, la cual dio inicio al Expte. N° XXX-2021, caratulado "INFORMACIÓN SUMARIA CR. L.M.D.C. S/ SUPUESTA AGRESIÓN VERBAL A PERSONAL FEMENINO", Expte. XXX-2021.

Entiende que esa situación no guarda relación alguna con el decoro, cordialidad y respeto que debe mantenerse para con el personal en el ámbito laboral, y particularmente al efectuar la entrega de un resultado o devolución de un examen, que ha deteriorado su integridad profesional, laboral y personal, circunstancias que se encuentran acreditadas por el testimonio del Dr. S.R, quien fuera Veedor en el mencionado expediente.

Apunta que lo sucedido es corolario de una serie de situaciones de similar índole vividas a lo largo de los años en varios y reiterados episodios con el Cr. L.M.D.C., que la llevaron a realizar tratamiento psicológico para poder sobrellevarlas de la mejor manera y minimizar el impacto del daño hacia su persona.

Agrega que ante las manifestaciones del Cr. L.M.D.C. puso a disposición de la Presidencia y de los Señores Vocales, para el caso que entendieran que no estaba capacitada, la renuncia al cargo subrogado. Que fue ratificada en el cargo por la Presidenta del Tribunal de Cuentas Cra. M.E.M. Que, sin embargo, el organismo no adoptó ninguna medida de índole preventiva tendiente a resguardarla hasta tanto se investiguen y/o

dilucidan los hechos denunciados. Por lo que siguió bajo la dependencia directa del Cr. L.M.D.C., concurriendo a trabajar a pesar del cuadro de angustia y temor permanente originado por la situación laboral sufrida.

Refiere que el 23/08/21 usufructuó cuatro días de licencia por prescripción de la Lic. C. L. M., debido a un cuadro de "Crisis de Angustia Aguda". Que también fue tratada por un profesional psiquiatra, el Dr. F.D, quien indicó medicación para tratar su cuadro. Que el 02/09/21 presentó otra nota ante el Tribunal de Cuentas peticionando puntualmente que se dé trámite y resolución a las actuaciones presentadas, y se adopten medidas de resguardo a su integridad psicofísica y emocional. Que el 08/09/21 reiteró su reclamo con la denuncia de nuevos hechos acontecidos en el ámbito laboral por parte del Cr. L.M.D.C., que involucró el cambio en la forma de trabajo respecto de su persona, pese a lo cual continuó asistiendo a trabajar a fin de no perder el cargo subrogado.

Enfatiza que todo lo vivido le provocó una crisis de angustia severa, insomnio, cogniciones negativas, evitaciones fóbicas y repertorio de conductas de desesperanza aprendida, deterioro en la autoestima, lesión moral, quiebre en su capacidad defensiva, así como el deterioro en el resto de sus áreas vitales, con el diagnóstico presuntivo de Trastorno Adaptativo Mixto Ansioso -Depresivo, secundario a posible "moobing".

Alude que prestó funciones hasta donde su salud física y psíquica lo permitieron, debiendo como consecuencia de los padecimientos sufridos en el ámbito de su lugar de trabajo y como corolario de todo lo expuesto, tomar licencia por prescripción psiquiátrica, por treinta días a partir del 27/09/21 bajo el diagnóstico "Trastorno Adaptativo Mixto (Ansioso-Depresivo) en relación a factores de posible moobing".

Explica que ante esa situación el Tribunal de Cuentas, a solicitud de los Sres. Fiscales Relatores S.P.P. Sala I, Cres. S.J y L.M.D.C., dictó la Disposición N° XXX/21 por la que dispuso el cese de la subrogancia que venía desempeñando a partir del 27/09/21 en el cargo de categoría Nivel Directora -Fiscal -porcentaje 71,00 -Área S.P.P. Sala I-(Fiscalía N° XX), que le había sido otorgada por la Disposición de Presidencia N° XXX/19. Que en los considerandos de la disposición se obvió reflexionar que la licencia solicitada fue producto

de las situaciones de violencia, maltrato verbal y psicológico sufridas en el ámbito laboral por parte de un superior jerárquico.

Arguye que con el dictado de la disposición se produjo una revictimización, victimización secundaria o doble victimización, por cuanto el organismo que debía adoptar las medidas de resguardo psicofísica no lo hizo y la castigó quitándole la subrogancia por haber tomado licencia psiquiátrica por posible "mobbing". Considera que la disposición atacada vulnera la normativa convencional suprallegal, resultando a todas luces inconstitucional e inconvencional.

Considera que la administración, al momento de aplicar el reglamento de subrogancias, obvió que en el caso se disponía el cese de la subrogancia a una mujer que había denunciado estar viviendo situaciones de maltrato o violencia por parte de un superior jerárquico varón, en el marco de una relación desigual de poder, con afectación de su integridad psicofísica, acreditada ante el propio Tribunal de Cuentas mediante certificado psiquiátrico y sin que este haya adoptado medidas de índole preventiva, lo que la llevara a tomar licencia mayor a cinco días.

Argumenta sobre los vicios de la Disposición N° XXX/21 y de la inaplicabilidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad del punto IV, inc. a), de la Resolución N° XXX/84 - Reglamento Interno de Subrogancias-. Que el cese de la subrogancia la afectó psicofísicamente y patrimonialmente por la pérdida de la bonificación correspondiente.

Funda la admisibilidad de la Acción de Amparo. Cita doctrina y jurisprudencia que considera aplicable. Ofrece pruebas. Formula reserva de Recursos Extraordinarios y del Caso Federal. Culmina con petitorio de estilo.

A fs. XXX se presenta la parte actora, informa nuevas situaciones y amplía la demanda ofreciendo pruebas. Comenta que el Tribunal de Cuentas dio por concluida la información sumaria iniciada a partir de su denuncia del 17/08/21 por maltrato laboral de parte de su superior, y dispuso el archivo de las actuaciones. Que se efectuaron apreciaciones parciales de las testimoniales, y se omitió la valoración de los hechos expuestos y la prueba producida con perspectiva de género.

Describe hechos ocurridos con anterioridad y posterioridad a ocupar el cargo de Fiscala subrogante. Que el Cr. L.M.D.C. siguió haciendo comentarios delante del personal a su cargo claramente sexistas, degradantes, desacreditantes y aún peyorativos. Que además mantenía reuniones con los responsables de las cuentas a su cargo sin siquiera avisarle. Que el denunciado dejó de dirigirle la palabra, excepto para infundir temores, sinsabores, y aún intentar manipulaciones haciendo sentir su posición dominante. Que durante los últimos meses criticaba la redacción de sus informes, manifestándole que "... lee más libros y que mira menos novelas". Que su malestar emocional se incrementó a la par de la descalificación personal permanente por parte del superior, llegando a naturalizar y normalizarlo.

A fs. XXX se presenta el Tribunal de Cuentas, con patrocinio letrado, presenta informe circunstanciado y contesta la demanda solicitando su rechazo.

Relata que, por Disposición N° XXX/19 se concedió a la actora la subrogancia de la Fiscalía N° XX del Sector Público Provincial del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco. Que el 27/09/21 presento certificado médico que justifica inasistencia a su lugar de trabajo por motivo de salud por el término de treinta días, y que fue concedida la licencia correspondiente.

Indica que el régimen de subrogancias establecido por el Acuerdo Plenario N° 40/84, Pto. 12 -Resolución N° 97/84, estipula en el inc. a) que las únicas causas que no provocarán la interrupción de la subrogancia será las que provengan del otorgamiento de la licencia por enfermedad que no supere los cinco días hábiles corridos. Que, en virtud de ello, por Disposición N° XXX/21 se formalizó el cese de la subrogancia asignada a la actora, procediendo el Tribunal de Cuentas dentro del marco reglamentario instituido por el art. 178 de la Constitución Provincial y el art. 5 de la Ley N° 831-A.

Sostiene la improcedencia de la inconstitucionalidad de la Resolución N° 97/84 y de la Disposición N° XX/21. Destaca que este último acto es legítimo y fue dictado con fundamento en la reglamentación interna de la subrogancia, atento a la licencia por razones de enfermedad de largo tratamiento requerida por la actora. Que ello se motivó en

que los Fiscales Relatores de la Sala x solicitaron la cobertura de las vacantes verificadas en su área, entre otras, la producida por la inasistencia por enfermedad de la actora.

Expone que la norma reglamentaria tiene por finalidad regular el derecho del agente, en función de las necesidades del servicio, y de aportar una mecánica ágil que evite demoras innecesarias en suplir al subrogado. Que la sustancia de esta figura del derecho administrativo es dar funcionalidad al cargo, prevaleciendo el interés público que lo motiva, y relativiza el derecho subjetivo a la permanencia y estabilidad del agente prestador del servicio en el contexto del instituto.

Entiende que el amparo es improcedente y que ha sido sustanciado con arbitrariedad. Que ello lo agravia de manera irreparable por violar el debido proceso legal, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley. Que se ha desvirtuado la esencia de la acción amparista, por cuanto la dilación del trámite colisiona con los presupuestos de esta vía de excepción.

Manifiesta que el amparo no ha sido creado para atender conflictos que, por su complejidad, requieran un estudio largo o prolongado de los hechos, ni de amplio debate y prueba. Que si tal lesión no es clara, explícita, o palmaria fáctica y legalmente, el remedio excepcional no es el procedimiento correcto para resolver el problema. Que la producción de las pruebas ofrecidas implicaría una ordinarización del proceso amparista, por lo cual su advertencia propiciaría descartarlo.

Funda en Derecho y cita jurisprudencia. Ofrece pruebas. Formula reserva de Recursos Extraordinarios y concluye con petitorio de rigor.

A fs. xx se dio traslado de las documentales presentadas por la demandada y de las impugnaciones formuladas, el que es contestado a fs. xxx.

A fs. xx se presentó la Fiscalía de Estado y asume intervención en los términos del art. 172 de la Constitución Provincial. Introduce Cuestión Constitucional y peticiona.

A fs.xx se abre la causa a pruebas y se proveen las ofrecidas.

A fs. xx se llamó autos para dictar Sentencia.

CONSIDERANDO:

I. La Sra. C.C.U.F. pretende: 1) la declaración de ilegalidad, nulidad, inconstitucionalidad e convencionalidad de la Disposición N° xxx/21 en cuanto dispone el cese de la subrogancia que venía desempeñando en el cargo de categoría Nivel Director - Fiscal - porcentaje 71,00 -Área S.P.P. Sala I (Fiscalía N° x); 2) la declaración de inaplicabilidad, inconstitucionalidad e inconventionalidad del punto IV, inc. a), de la Resolución N° 97/84 - Reglamento Interno de Subrogancias-.

Señala que por Disposición N° xx/19 se le otorgó la subrogancia del cargo de categoría Nivel Directora -Fiscal -porcentaje 71,00 -Área S.P.P. Sala I -(Fiscalía N° xx). Que el 13/08/21, durante la entrega de notas del examen de Fiscal del Área Central y en oportunidad de efectuar la devolución de su examen, el Cr. L.M.D.C. profirió en un tono escandalizador, exagerado, con alto contenido emocional y gestual, las expresiones "que se asustó con mi examen", "que no pudo dormir en toda la noche", "que fue una vergüenza", "tu examen me dio miedo", "vení a la tarde y te doy cátedra", repitiéndolo en varias oportunidades, todo ello finalizando con que "no me encuentro capacitada para ejercer el cargo de Fiscal" y un tanto amenazante "que debería rever dicha subrogancia".

Apunta que lo sucedido es corolario de una serie de situaciones de similar índole vividas a lo largo de los años en varios y reiterados episodios con el Cr. L.M.D.C., que la llevaron a realizar tratamiento psicológico para poder sobrellevarlas de la mejor manera y minimizar el impacto del daño hacia su persona. Que el organismo no adoptó ninguna medida de índole preventiva tendiente a resguardarla.

Alude que, como consecuencia de los padecimientos sufridos en el ámbito de su lugar de trabajo, debió tomar licencia por prescripción psiquiátrica por treinta días a partir del 27/09/21 bajo el diagnóstico "Trastorno Adaptativo Mixto (Ansioso-Depresivo) en relación a factores de posible Moobing". Que, ante ello, el Tribunal de Cuentas dictó la Disposición N° xx/21 por la que dispuso el cese de la subrogancia que venía desempeñando.

Que con el dictado de la disposición se produjo una revictimización, victimización secundaria o doble victimización, por cuanto el organismo no adoptó las medidas de resguardo psicofísico y la castigó quitándole la subrogancia por haber tomado licencia psiquiátrica por posible "mobbing". Considera que la disposición atacada vulnera la

normativa convencional suprallegal, resultando a todas luces inconstitucional e inconveniente.

A su turno, el Tribunal de Cuentas hace hincapié en que la actora presentó el 27/09/21 un certificado médico que justifica inasistencia a su lugar de trabajo por el término de treinta días, y que fue concedida la licencia correspondiente. Que el régimen de subrogancias establecido por la Resolución N° 97/84, estipula que las únicas causas que no provocarán su interrupción será las que provengan del otorgamiento de la licencia por enfermedad que no supere los cinco días hábiles corridos. Que, en virtud de ello, por Disposición N° xxx/21 se formalizó el cese de la subrogancia asignada a la actora.

Sostiene la improcedencia de la inconstitucionalidad de la Resolución N° 97/84 y de la Disposición N° xx/21. Que este último acto es legítimo y fue dictado con fundamento en la reglamentación interna cuya finalidad es regular el derecho del agente y aportar una mecánica ágil que evite demoras en suplir al subrogado. Que la sustancia de esta figura es dar funcionalidad al cargo, prevaleciendo el interés público que lo motiva, y relativiza el derecho subjetivo a la permanencia y estabilidad del agente.

Entiende que el amparo es improcedente y que ha sido sustanciado con arbitrariedad. Que ello lo agravia de manera irreparable por violar el debido proceso legal, la defensa en juicio y la igualdad ante la ley. Que se ha desvirtuado la esencia de la acción, por cuanto la dilación del trámite colisiona con sus presupuestos. Que la lesión denunciada no es clara, explícita, o palmaria fáctica y legalmente, ni el remedio excepcional es el procedimiento correcto para resolver el problema.

II. Así trabado el litigio, no se encuentra controvertido que la Sra. C.C.U.F. es personal de planta permanente del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco. Tampoco se discute que en el año 2019 se le otorgó mediante Disposición N° xxx/19 la subrogancia al cargo de la categoría Nivel Directora -Fiscal -porcentaje 71,00 -Área S.P.P. Sala I -(Fiscalía N° xx), y que por Disposición N° xx/21 el organismo dispuso el cese de la subrogancia que venía desempeñando a partir del 27/09/21 por aplicación de la Resolución N° 97/84 -Reglamento Interno de Subrogancias-.

En consecuencia, la cuestión se circunscribe a dirimir si corresponde declarar la nulidad de la Disposición N° xxx/21 y, en su caso, la declaración de inaplicabilidad, inconstitucionalidad e inconveniencia del punto IV, inc. a), de la Resolución N° 97/84.

Para la resolución de la presente causa el Tribunal no se encuentra obligado a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 300:552; 301:602; 302:1191). En sentido análogo, tampoco es obligación ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolverla (Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).

III. Sentado lo expuesto, a fin de que proceda la acción de amparo, tienen que reunirse los siguientes presupuestos: a) una lesión sobre la sustancia constitucional de los derechos, que debe ser cierta -frustración concreta de la relación de disponibilidad básica-, actual -presente o inminente-, directa -productora por sí misma de un menoscabo- y manifiesta; b) una actuación o inactividad inequívoca u ostensiblemente antijurídica; c) un hecho, acto u omisión de autoridad pública o particular; d) la imposibilidad de tutela por otros cauces formales (arts. 43 C.N., 19 C.P., art. 1 Ley N° 4297).

De manera que siempre el concepto de acto lesivo debe ser interpretado en el sentido más amplio posible, involucrando todo hecho positivo o negativo. Por lo que, cualquier conducta estatal o de un particular, sean actos, hechos, acciones, decisiones, órdenes, negocios jurídicos u omisiones, con capacidad de afectar los derechos de los particulares, queda comprendida en los arts. 43 de la Constitución Nacional y 19 de la Constitución Provincial.

La acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, y su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que tiene por objeto una efectiva protección de derecho más que una ordenación o resguardo de competencias, por lo que los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas afin de evitar la frustración de derechos fundamentales (CSJN, Fallos: 339:201, entre muchos otros).

La doctrina asevera que actualmente el amparo es tanto una acción o garantía, como un derecho constitucional en sí mismo, dado que excedería lo meramente instrumental, y que, como secuela del derecho a una tutela jurídica efectiva, conferiría a la persona la facultad de reclamar al Estado la posibilidad de plantear su pretensión de amparo, que se lo diligencie idóneamente la justicia, y que se dicte una sentencia útil para protegerlo. Es el derecho a utilizar la garantía del amparo judicial programada por el art. 43 de la Constitución Nacional, cual consiste en el planteo de una acción, vehiculizada por un proceso expedito y rápido (conf. Néstor Pedro Sagües, "Compendio de Derecho Procesal Constitucional", Ed. Astrea, Bs. As., año 2009, pág. 427 y sig.; Alberto Antonio Spota, "Ensayos sobre la doble naturaleza jurídica del amparo constitucional", LL, 2002, 1995-E-1114 y sig.).

Entonces, teniendo en cuenta la plataforma fáctica, invocándose el menoscabo manifiesto de derechos, es admisible la vía procesal utilizada ante la inexistencia de otra más idónea, entendiendo que la ilegalidad o arbitrariedad debe resultar manifiesta, clara, patente, inequívoca de los elementos de juicio, hechos y pruebas aportadas al formular el planteo, y el acotado marco probatorio que autoriza el proceso urgente. La cuestión a resolver tampoco requiere de mayor debate y prueba, encontrándose reunidos los elementos necesarios para resolver el fondo de la cuestión.

IV. Sentado lo expuesto, de manera preliminar se impone determinar si la pretendida declaración de nulidad de la Disposición N° xxx/21, en cuanto ordena el cese de la subrogancia del cargo de la categoría Nivel Director -Fiscal -porcentaje 71,00 -Área S.P.P. Sala I (Fiscalía N° xxx), se ha tornado abstracta.

Conforme las constancias de autos, observamos que el Tribunal de Cuentas, mediante Resolución N° xxx/22 del 30/05/22, promovió a la Sra. C.C.U.F. a partir del 01/06/22, del Cargo Categoría Nivel Jefe de Departamento -Supervisor -porcentaje 57,00 - Área SPP Sala I -, al Cargo Categoría Nivel Director -Fiscal -porcentaje 71,00 -Área S.P.P. Sala xx (fs. xxx).

Ello denota que al momento de interposición de la demanda (18/10/21, fs. xx) la accionada había ordenado el cese de la subrogancia concedida a la Sra. C.C.U.F. mediante la Disposición N° xxx/19, variando luego de su promoción la plataforma fáctica de la causa ya

que, conforme la Resolución N° xx/22 del 30/05/22, el organismo nombró a la actora de manera definitiva a partir del 01/06/22 en el mismo cargo que oportunamente subrogó.

En este contexto la doctrina y jurisprudencia señalan que, aun cuando la causa pueda presentarse inicialmente como concreta, es factible que con posterioridad se torne abstracta como consecuencia de las condiciones constitutivas del objeto de la decisión que se persigue. Pues, "debe distinguirse la cuestión inicialmente abstracta de la cuestión que siendo concreta en su origen pierde ese carácter mientras el proceso se sustancia. La desaparición de los requisitos jurisdiccionales importa también la del poder de juzgar" (Fallos 248:51).

En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó: "(...) donde no hay discusión real en el actor o demandado, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo o porque a razón de acontecimientos subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción; o donde las cuestiones a decidir no son concretas o los sucesos ocurridos han tornado imposible de acodar una reparación efectiva, la causa se ha tornado abstracta y en numerosos y sucesivos decisorios insiste en que las sentencias de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión" (Fallos 193:524; 298:33; 301:947; 302:721; 311:870 y 1810; en este sentido, Disertación del Dr. Carlos José Laplacette en sesión privada del Instituto de Política Constitucional, del 18 de mayo de 2011. Exigencias temporales del caso judicial. Los casos devenidos abstractos, situaciones limítrofes y discusión sobre su constitucionalidad).

También se ha dicho que la subsistencia de la finalidad del litigio constituye requisito jurisdiccional que incumbe a los jueces comprobar de oficio; por ello, cuando la cuestión es abstracta, los jueces deben abstenerse de dictar pronunciamiento alguno al respecto. Dicho de otro modo, el Poder Judicial solo puede resolver "colisiones efectivas de derechos y no hacer declaraciones generales que establezcan normas para el futuro" (Fallos 184:358; 245:552; 258:284; 259:191 y 196, entre otros).

Atento las razones expresadas, no habiendo la parte actora reclamado expresamente resarcimiento alguno por los perjuicios denunciados, resulta pertinente declarar abstracta la pretendida declaración de nulidad de la Disposición N° xx/21. En

consecuencia, es inoficioso que el Tribunal se pronuncie sobre la inaplicabilidad, inconstitucionalidad e inconveniencia del punto IV, inc. a), de la Resolución N° 97/84 - Reglamento Interno de Subrogancias-.

V.1. No obstante precedentemente resuelto, destacamos que los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras tienen como principio general la protección o tutela de la parte más débil de las relaciones laborales, que contiene reglas específicas que implementan la interpretación más favorable al trabajador (in dubio pro operario), y otros principios básicos como el principio de la irrenunciabilidad, de la continuidad de la relación, de la condición más beneficiosa, el de igualdad de trato y no discriminación, entre otros.

Esas son directrices que se encuentran consagradas en el contexto supranacional, constitucional y legal, como en el art. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el art. 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en el Convenio N° 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -aprobado mediante la Ley N° 27580, y en el art. 14 de la Constitución Nacional.

El art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" establece: "Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (...) b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (...) d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (...) f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso

fectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces”.

En la Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, “tiene por objeto promover y garantizar: a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia” (art. 2).

La norma define a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, comprendiendo las perpetradas desde el Estado o por sus agentes (art. 4).

Quedan especialmente comprendidos en la definición la violencia física, la psicológica, la sexual, la simbólica, y la económica y patrimonial. La ley define a la psicológica como la que causa un daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonor, descrédito, manipulación o aislamiento, la indiferencia, la ridiculización, o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. A su vez, la económica y patrimonial se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la afectación de sus

bienes, instrumentos de trabajo, derechos patrimoniales, recursos económicos, la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo, etc. (art. 5).

En cuanto a las modalidades, entendidas como las distintas formas en que se manifiestan los tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, la norma especialmente comprende la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia mediática (art. 6).

Específicamente, la violencia institucional es definida como aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en estaley. Y la violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo, e incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral (art. 6, incs. b y c).

El art. 16, inc. i, establece el derecho a “la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos”.

Finalmente, el art. 26 instituye que durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, y disponer toda otra necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer (inc. a.7).

A su vez, el art 1 de la Ley N° 1886-M establece: “Adhiérase la Provincia del Chaco al Título III, Capítulo II de la ley nacional 26.485 -de Protección Integral a las Mujeres-

con las adecuaciones que establece la presente. Este procedimiento se regirá por el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. El/la juez/a interviniente tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia rigiendo el principio de obtención de la verdad material.”

En el ámbito provincial también rige la Ley N° 2023-A (antes Ley N° 7006) de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en el ámbito de la Administración Pública, cuyo objeto es prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito laboral o en ocasión del trabajo (art. 1).

Con el objeto de brindar garantías a las personas involucradas, expresamente la norma contempla que ningún trabajador o trabajadora que haya denunciado ser víctima de las acciones enunciadas en la ley, o haya comparecido como testigo de las partes, o de cualquier forma haya participado en una investigación o procedimiento relacionado con la violencia laboral, podrá por ello ser sancionado o sufrir perjuicio personal alguno en su empleo (art. 23).

Asimismo, por Ley N° 2997-G la Provincia del Chaco adhirió a la Ley N° 27.499 -Ley Micaela- que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías del sector público provincial. Esta norma tiene por fin garantizar, promover y fortalecer, los cursos y talleres de capacitación en género, brindando información, generando concientización y prevención en la violencia contra las mujeres (arts. 1, 2 y 3).

Por mandato Constitucional y Convencional, los organismos del Estado deben incorporar la perspectiva de género como estándar de respeto de los derechos humanos de

las mujeres, generando espacios de reflexión y concientización, y promoviendo buenas prácticas en el ámbito laboral y con la ciudadanía en general.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: "(...) debe incorporarse la perspectiva de género como (...) pauta hermenéutica constitucional y como principio rector para la solución de ese tipo de casos, a efectos de que no se ignore la complejidad de esta problemática que afecta a miles de mujeres en el ámbito de nuestra República (Fallos 334:1204, "Leiva", voto Highton).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que: "en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belén de PARÁ" (Caso "Campo Algodonero vs. México", Sentencia del 16/11/09). En ese sentido, también dijo en el Informe sobre el "Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas 2007", que "el Estado puede ser responsable por no "ordenar, practicar o valorar pruebas" que pueden ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos".

2. De las constancias de la causa verificamos que, la Sra. C.C.U.F presentó el 17/08/21 ante la Presidencia del Tribunal de Cuentas una nota poniendo en conocimiento de los Vocales del organismo los hechos de maltrato verbal y laboral propinados el 12/08/21 por el Sr. L.M.D.C. en las instalaciones de la Fiscalía Relatora "xx", durante la entrega de notas del examen de Fiscal del Área Central. Que esta denuncia dio origen al Expte. N° xxx-E, caratulado "INFORMACIÓN SUMARIA CR. L.M.D.C. S/ SUPUESTA AGRESIÓN VERBAL A PERSONAL FEMENINO" (fs. xxx, actuaciones administrativas reservadas a fs. 223).

Mediante nota del 02/09/21, la denunciante urge el trámite de las actuaciones y su resolución, y solicita que se considere la adopción de medidas de resguardo a su integridad psicofísica y/o emocional (fs. xxx). Ordenada la información sumaria, el Sr. L.M.D.C. (Fiscal Relator denunciado por la actora) presentó su informe y descargo el 01/09/21, en el que efectúa negativa de los hechos relatados por la Sra. C.C.U.F. y brinda su versión de los mismos (fs. xx).

La Sala I del Tribunal de Cuentas, por Resolución del 06/09/21 dispone tener por contestada la vista conferida, designar como secretaria de actuaciones a la Directora de Asuntos Jurídicos, y llamar a audiencia testimonial a la Cra. S.J y al Dr. S.R (fs. XX).

El día 14/09/21 presta declaración testimonial la Sra. S.R.J, en la que refiere al intercambio de palabras acontecido el día 13/08/21 en las instalaciones de la Fiscalía Relatora "XX", en las que el Sr. L.M.D.C. manifestó a la Sra. C.C.U.F. que "quizás habría que rever tu subrogancia" -respuesta a segunda pregunta-(fs. XXX).

El 16/09/21 se recepitó declaración testimonial al Sr. S.G.R, quien estuvo presente el día del hecho como veedor, refiriendo que el Sr. L.M.D.C. en reiteradas oportunidades dijo a la accionante que "no se encontraba capacitada para ocupar el cargo de Fiscal", que "no le gustó su examen", que "su examen daba miedo", y "que iba a rever su subrogancia como Fiscal" -respuesta a segunda pregunta-(fs. XXX).

El 17/09/21 la Sra. C.C.U.F. presenta una nueva nota ante los miembros del Tribunal de Cuentas, solicitando "tomen las medidas necesarias a efectos de poder seguir trabajando de manera normal y habitual en mi oficina, con el personal a mi cargo y con las cuentas que también están a mi cargo, y en segunda instancia instó a Vosotros, que se tomen las medidas pertinentes a fin de que los hechos denunciados sean dilucidados en su totalidad, tanto el hecho de violencia vivido en oportunidad de la entrega de notas del examen de Fiscal, como los anteriores denunciados en la misma oportunidad por mi persona, los que denotan violencia laboral, verbal, psicológica y de género, impartidos por un superior jerárquico varón hacia una subordinada mujer, así como los hechos nuevos de violencia suscitados con posterioridad a mi denuncia sean considerados debido a su vinculación con los primeros hechos denunciados ya que devienen en consecuencia de ellos, de lo contrario me veré obligada a iniciar acciones legales por la vía ordinaria..." (fs. XX).

Asimismo, acompaña una nota presentada ante el mismo organismo el 08/09/21 informando situaciones surgidas con posterioridad al reclamo formulado, y en la que denuncia modificaciones en las condiciones laborales surgidas luego del reclamo por violencia formulada contra el Sr. L.M.D.C., y que denotarían una marcada intención persecutoria, discriminatoria y con ánimo de represaría de parte del Fiscal Relator (fs. xxx).

El 18/10/21, la Sala I del Tribunal de Cuentas integrada por el Dr. O.A.C y E. J.P. dictó la Deposition N° XXX/21, resolviendo dar por concluida la información sumaria y ordenó su archivo. Para así resolver sostuvo que **los elementos probatorios de las actuaciones administrativas no eran suficientes para tener por acreditado el hecho de violencia tal cual fue denunciado**, y que **“el único material probatorio disponible no aporta más certidumbre que el de la existencia de un incidente, el día 12/8/2021, que excedió, por cierto, el plano de una discusión ordinaria, incluido el uso de palabras altisonantes con epítetos de corte ofensivo, según la subjetividad de quien lo recibe”**.

Así, el organismo dijo que **“relevadas las testimoniales queda claro que esas conductas son atribuidas a una u otra parte sin que exista una coincidencia que desequilibre esa paridad, indispensable para atribuir responsabilidad disciplinaria. Que, lo cierto, es que no se cuenta con las pruebas mínimas e indispensables que permitan concluir en que el hecho existió del modo en que cada uno de los protagonistas lo exponen (...). Que, en consecuencia, cabe efectuar un llamado a la reflexión de las partes involucradas en la presente actuación, recomendando evitar la reiteración de situaciones de igual característica, sin perjuicio de las medidas que en adelante pueda adoptar esta Sala I en el plano funcional”** (fs. XXX).

La Sra. C.C.U.F. interpuso recurso de revocatoria contra la Deposition N° XXX/21 (fs. XXX), el que fue rechazado mediante la Disposición N° XXX/21 del 12/11/21 suscripta por el Dr. O.A.C y Cr. E.J.P, argumentando que **“se consideró la denuncia de fs. XXX, y la presentación de fs. XXX, de cuya actividad surgió claramente la concurrencia de versiones contrapuestas en relación a la base fáctica del caso. Asimismo, la existencia como único material probatorio idóneo las testimoniales que fueron colectadas conforme las constancias que obran agregadas a fs. XXX y fs. XXX, respectivamente, incorporación que ha sido consentida por ambas partes”**.

Y luego concluyó en que **“tanto de la denuncia como del descargo por un lado, y de las declaraciones testimoniales por el otro, no fue posible tener certeza sobre la existencia del hecho tal cual se expone en la denuncia de fs. XXX, lo excluye la factibilidad de**

imputación alguna”, y que “la duda recayó concretamente sobre la materialidad del hecho” (fs. xx).

Ínterin a todo ello, de los certificados médicos adjuntados y presentados por ante el Tribunal de Cuentas, emerge que el 23/08/21 la Lic. en Psicología C. L. M. prescribió a la Sra. C.C.U.F. cuatro días de reposo laboral, y luego el Dr. F. G. D. el 27/09/21 le prescribió reposo laboral por treinta días por encontrarse en tratamiento ante trastorno adaptativo mixto (ansioso-depresivo) en relación a factores de posible “mobbing”. Asimismo, el 27/09/21 Salud Ocupacional efectuó reconocimientos médicos por enfermedad y justificó la licencia por el art. 14B desde el 27/09/21 al 26/10/21, por treinta días corridos (documental reservada a fs. XXX vta.).

Asimismo, el 30/09/21 la Presidencia del Tribunal de Cuentas, a cargo de la Cra. M. E. M., resolvió por Disposición N° XXX/21 cesar la subrogancia que venía cumpliendo la Sra. C.C.U.F. en el cargo de categoría Nivel Director -Fiscal -porcentaje 71,00 -Área S.P.P. Sala I (Fiscalía N° XX) que fuera concedida por Disposición de Presidencia N° XXX/19, a partir del 27/09/21, y designar a otra agente. Para decidir de ese modo, tuvo en cuenta lo solicitado por los Sres. Fiscales Relatores S.S.P. Sala XX Cres. S. R. J. y L.M.D.C., con el visto bueno de los Sres. Vocales Sala XX, Dr. O.A.C. y Cr. E. J. P. (reservada a fs. XXX.).

La Sra. C.C.U.F. denunció ante la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral los mismos hechos descriptos en la presente causa. Este organismo, al emitir su Dictamen del 05/05/22 dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos y de Género, concluyó en que “es un caso que reúne los criterios de violencia laboral con connotaciones de género”, y que las conductas del Sr. L.M.D.C “son compatibles con las situaciones de violencia laboral que se establecen en la normativa legal. Todas ellas prácticas que fueron naturalizadas en el espacio de trabajo y transversales a cadauno de los estratos de poder dentro de la institución”.

Finalmente, la mencionada Oficina aconsejó, entre otras cuestiones, el inicio de una información sumaria para dilucidar la situación planteada, la realización de capacitaciones sobre género conforme la Ley N° 27.499 -Ley Micaela-, y la reparación del

daño ocasionado en el marco del derecho común (fs. xx, Expte. N° xxx caratulado: “U.F. S/ Medida Cautelar”).

En el Informe de la Lic. en Psicología M. E. L., dependiente de la misma Oficina Interdisciplinaria y valorada en el precitado dictamen, se diagnosticó a la Sra. C.C.U.F. con trastorno de pánico y ansiedad generalizada, problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo, y exposición a factores de riesgo ocupacional. Finalmente concluyó en que “las situaciones aquí planteadas reúnen criterios para ser consideradas como VIOLENCIA LABORAL, de acuerdo con lo considerado en la Ley N° 2023-A”, que los relatos presentan suficientes indicadores de violencia laboral, y que el diagnóstico dado es consecuencia del acoso laboral (fs. XXX).

En el marco de la causa penal iniciada contra el Sr. L.M.D.C. por violencia de género, tramitada por Expte. N° XXX/2021-1 caratulado: “U.F., C.C. S/ Denuncia”, se dio intervención al Centro Judicial de Género del Poder Judicial del Chaco, y esta dependencia formuló las siguientes observaciones:

Que “las conductas denunciadas, que presuntamente habrían ocasionado daño psicológico a C., provendrían de un superior jerárquico, que como tal posee, mayor jerarquía, responsabilidad y el compromiso de velar por un ambiente laboral con respeto a los derechos humanos y libre de violencias. Dicho de otro modo, los hechos denunciados son justamente aquellos que la superioridad jerárquica tiene la obligación de evitar. Entendemos que los hechos denunciados encuadraría en los términos de la LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES N° 26.485, que es de orden público y que en art. 6 inc. c) señala a la violencia laboral como una modalidad de violencia hacia las mujeres”.

Que la Sra. C.C.U.F. podría “estar frente a un caso de violencia psicológica laboral vertical descendente en contexto de violencia de género hacia la mujer -la que sufre una trabajadora por parte de un superior, por el hecho de ser mujer-”, y que “se hallaría en un grado de mayor vulnerabilidad por su subordinación jerárquica (relación desigual de poder) y estarían siendo afectados sus derechos humanos fundamentales, como el derecho a una vida libre de violencias en cualquier ámbito en que se desarrollen sus actividades”.

Que fue víctima de un “manto de naturalización e invisibilización de este tipo de agresiones”, y que ello “se trasluce de la Disposición N° XX/2021 del Tribunal de Cuentas (OS 183) donde claramente se minimizan las violencias, considerando a los hechos como “...la existencia de un incidente, el día 12/08/2021. Que excedió, por cierto, el plano de una discusión ordinaria, incluido el uso de palabras altisonantes con epítetos de corte ofensivo, según la subjetividad de quién lo recibe” (...) depositando otra vez en la persona víctima y en su subjetividad la definición del daño”.

Finalmente, sugirió que “3) Recordar a las autoridades del Tribunal de Cuentas, al denunciado y a los y las agentes, la vigencia de la obligatoriedad de la capacitación en género y violencias que establece la Ley 27.499 “Ley Micaela” así como la vigencia del Convenio 190 de la OIT con rango de ley nacional. 4) Disponer la generación de espacios de sensibilización sobre la violencia laboral en el Tribunal de Cuentas, con participación de licenciadas/os en psicología y/o profesionales con perspectiva de género y violencias (...)” (fs. XX).

En el Informe Interdisciplinario de la Oficina del Servicio Social –I Circunscripción, del Poder Judicial del Chaco, realizado en el Expte. N° XXX/2021-1, se observó que la Sra. C.C.U.F. presenta marcados sentimientos de angustia respecto a lo ocurrido en el ámbito laboral, como ser descalificaciones y palabras de su superior que degradaban el clima de trabajo, y que ello generaba en la misma un desgaste psicológico. Que “la problemática descrita ha impactado en su psiquismo, al quedar ubicada en posición de inferioridad donde según expresa, se buscaba deslegitimar sus habilidades”.

Concluye que la problemática laboral habría producido un impacto desfavorable en su subjetividad, generando un cuadro del tipo depresivo, y recomienda la continuidad del tratamiento psicológico (fs. XXX).

3. Reseñadas las circunstancias de la causa, entendemos que el Tribunal de Cuentas no ha tenido en consideración la perspectiva de género ante los hechos de violencia laboral psicológica y simbólica padecidos por la Sra. C.C.U.F., y que esta situación concluyó con actos de violencia laboral e institucional económica y simbólica de parte del mismo

organismo demandado, al revocar la subrogancia que ejerció la actora por más de dos años y archivar la información sumaria iniciada contra el Sr. L.M.D.C. por violencia de género.

Así, verificamos que el organismo demandado no tomó medidas de resguardo a la integridad psicofísica y/o emocional de la actora luego de las presentaciones formuladas el 17/08/21, el 02/09/21, el 08/09/21 y el 17/09/21, en las cuales denunció hechos de violencia psicológica y simbólica de género de parte del Sr. L.M.D.C., que denotarían una marcada intención persecutoria, discriminatoria y con ánimo de represaria en el ámbito laboral (fs. xxx, Expte. N° xxx-E).

Por el contrario, con un claro acto de violencia laboral económica, el Tribunal de Cuentas dejó sin efecto la subrogancia que venía desempeñando la Sra. C.C.U.F. a partir del 27/09/21 mediante Disposición N° xxx/21, omitiendo merituar la situación de violencia psicológica que había sido denunciada por la accionante y acreditadas por los certificados médicos que diagnosticaban un trastorno adaptativo mixto (ansioso-depresivo) en relación a factores de posible “mobbing”, acto administrativo dictado a requerimiento -entre otros-del propio Sr. L.M.D.C., Fiscal Relator investigado por violencia de género (ver documental reservada a fs. xx.).

También observamos un claro acto de violencia institucional de parte del Tribunal de Cuentas al dictar la Deposition N° xxx/21, y su consecuente Disposición N° xx/21, cual dio por concluida la información sumaria iniciada contra el Sr. L.M.D.C. y ordenó su archivo, en cuanto consideró que los elementos probatorios no eran suficientes para tener por acreditado el hecho de violencia tal cual fue denunciado, que el incidente denunciado fue una discusión ordinaria, y que el corte ofensivo de las palabras dependía de “la subjetividad de quien lo recibe” (fs. xxx).

Además de estar acreditada la materialidad del hecho denunciado mediante las declaraciones testimoniales de la Sra. S.R.J (fs. XX) y del Sr. S.G.R (fs. XX), el informe de la Lic. en Psicología M. E. L. (fs. XX), el informe interdisciplinario de la Oficina del Servicio Social del Poder Judicial (fs. XXX), las observaciones del Centro Judicial de Género del Poder Judicial del Chaco (fs. XX) y el Dictamen de la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral (fs. xxx, Expte. xxx/21), el Tribunal de Cuentas

no actuó con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7 "Convención de Belem do Pará"), con la amplitud probatoria para demostrarla en las circunstancias especiales en que se desarrollan tales actos de violencia (art. 16, inc. i, Ley N° 26.485), y en ejercicio de las amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, por las que debe disponer de oficio las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos (art 1 de la Ley N° 1886-M).

Efectivamente, el organismo demandado naturalizó e invisibilizó las agregaciones del Sr. L.M.D.C..

Ante la situación de violencia institucional demostrada, señalamos al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco que deberá cumplir en un plazo razonable con la Ley N° 2997-G y la Ley N° 27.499 -Ley Micaela-, con la finalidad de que el Sr. L.M.D.C. y todas las personas que se desempeñen en el organismo, sean capacitadas en la temática de género y violencia contra las mujeres, con participación de licenciadas/os en psicología y/o profesionales con perspectiva de género y violencias, de conformidad a las previsiones legales. Debiendo informar y acreditar el cumplimiento de la aquí dispuesto.

Hacer saber lo aquí resuelto al Centro Judicial de Género del Poder Judicial del Chaco y a la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral, con copia de la presente Sentencia. Por Secretaría, líbrese Oficio y remítase por correo electrónico oficial.

VI. Ahora bien, tanto la postura procesal como la conducta de las partes con anterioridad al proceso, poseen incidencia en orden a la imposición de las costas.

Del estudio de las actuaciones se observa que, mediante Disposición N° xx/19 el Tribunal de Cuentas concedió la subrogancia en el cargo de la categoría Nivel Director – Fiscal –porcentaje 71,00, a la Sra. C.C.U.F.. Que la actora denunció al Sr. L.M.D.C por hechos de violencia de género el 17/08/21, lo que fue ampliado mediante las presentaciones del 02/09/21, el 08/09/21 y el 17/09/21 (fs. xxx, Expte. N° xxx-E), y acreditado por los certificados médicos que presentó ante la empleadora (reserva fs. xx.). Que, sin embargo, el organismo dejó sin efecto la subrogancia que venía desempeñando la Sra. C.C.U.F. mediante Disposición N° xxx/21 a requerimiento -entre otros-del propio Sr. L.M.D.C., Fiscal Relator

investigado por violencia, omitiendo valorar con perspectiva de género la situación que había sido denunciada por la accionante.

Es decir, la conducta de la demandada es la que motivara la presente Acción de Amparo, por lo que corresponde que se impongan las costas del juicio al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco.

En ese sentido sostuvimos que, si bien cuando la causa es declarada abstracta y el Juez no debe dirimir ninguna contienda litigiosa -lo que teóricamente impediría afirmar la existencia de vencedor y vencido-, cuando la conducta positiva u omisiva de una de las partes, injustificadamente, ha conducido a la otra a acudir a la instancia jurisdiccional, tal circunstancia amerita considerar la imposición de las costas a la parte que hubiere obrado ilegítima o reticentemente (conf. este Tribunal en Sentencia Nº 353/05 in re "Agroaéreo S.R.L. c/ Municipalidad de las Breñas s/ Demanda Contenciosa Administrativa", Expte. Nº 1279/03).

En ese iter se dijo que: "... debe revocarse el pronunciamiento que al momento de distribuir las costas procesales, prescinde de la razón para litigar que asistió a la actora, de lo petitionado por esta al demandar y de los resultados obtenidos a propósito de la acción intentada. Si el amparista se vio forzado a recurrir a los estrados judiciales por la actitud reticente del demandado, corresponde imponer la totalidad de las costas del proceso a quien ha provocado la promoción del mismo, aun cuando el pronunciamiento sobre la cuestión de fondo se torne abstracta durante la tramitación del juicio" (conf. C.S. Justicia Tucumán -Sala en lo Civil y Penal-autos "Derrache Dino c/ Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/ Habeas Data", Nº 790/07). Y que: "...basta que la conducta de una de las partes obligue a la otra a una articulación, para que proceda la condena en costas" (ED88:740; Conf. Morello, T II-B pág. 191/193).

Conforme a lo expuesto, las costas se imponen a la demandada. La regulación de los honorarios se efectúa teniendo en cuenta el trabajo profesional desarrollado por el letrado de la actora y las pautas previstas en los arts. 3, 4 y 25 de la Ley Nº 288-C. Atento a la forma en que se imponen las costas, no se regulan honorarios a los profesionales intervinientes por la demandada por la relación de dependencia que los vincula.

Por ello, la **Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo;**

RESUELVE:

I. DECLARAR ABSTRACTA la pretendida declaración de nulidad de la Disposición N° xxx/21, resultando inoficioso pronunciamiento alguno sobre la inaplicabilidad, inconstitucionalidad e inconveniencia del punto IV, inc. a), de la Resolución N° xxx/84 - Reglamento Interno de Subrogancias-.

II. SEÑALAR al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco que deberá cumplir en un plazo razonable con la Ley N° 2997-G y la Ley N° 27.499 -Ley Micaela-, con la finalidad de que el Sr. L.M.D.C. y todas las personas que se desempeñen en el organismo, sean capacitadas en la temática de género y violencia contra las mujeres, con participación de licenciadas/os en psicología y/o profesionales con perspectiva de género y violencias, de conformidad a las previsiones legales. Debiendo informar y acreditar el cumplimiento de la aquí dispuesto.

III. HACER SABER lo aquí resuelto al Centro Judicial de Género del Poder Judicial del Chaco y a la Oficina Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral, con copia de la presente Sentencia. Por Secretaría, líbrese Oficio y remítase por correo electrónico oficial.

IV. IMPONER las costas a la demandada.

V. REGULAR los honorarios al **Dr. H.O.A.** en la suma de **pesos xxx (\$ xx)** como patrocinante. Todo más IVA si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley. No se regulan honorarios a los abogados de la demandada en razón de su relación de dependencia con la condenada en costas.

VI. PROTOCOLICÉSE, REGISTRESE Y NOTIFÍQUESE conforme Anexo de la Resolución N° 735/22 del Superior Tribunal de Justicia -Reglamentación de Notificaciones Electrónicas-.

NATALIA PRATO STOFFEL
-Jueza Sala Primera --
Cámara en lo Contencioso Administrativo

SILVIA GERALDINE VARAS
Presidenta Sala Primera-
Cámara en lo Contencioso Administrativo

NATALIA E. CODUTTI
Secretaría Provisoria Sala Primera
Cámara en lo Contencioso Administrativo